



► Mina de sal perteneciente a la empresa Iberpotash situada en Súrria (Bages).

CONFLICTO MEDIOAMBIENTAL

Denuncia ante la Generalitat por la actividad minera de Iberpotash

► Entidades ecologistas critican la «pasividad» ante la amenaza ambiental

|| SERGIO DELGADO
BARCELONA

Las principales entidades ecologistas de Catalunya presentaron ayer una demanda pública de responsabilidad ante la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generali-

tat. En ella solicitan personalmente al *conseller* Santi Vila que inicie un expediente ambiental por los daños y amenazas causados por la actividad de la empresa minera Iberpotash en la cuenca del Llobregat y que suspenda provisionalmente las obras de ampliación de las minas en la comarca del Bages.

Es la primera vez que se presenta una solicitud de este tipo frente a la Administración. Un escrito que, se-

gún Josep-Lluís Moner, representante del Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA), «evita iniciar un proceso judicial complejo y costoso». El propio Moner confirmó que esta nueva medida «es complementaria de la judicial» y permite «solicitar una serie de responsabilidades», tanto a la empresa Iberpotash como a la propia Generalitat, que «asume una actitud pasiva ante la gravedad del problema».

La Federación de Ecologistas de Catalunya, junto al CEPA, la Liga por la Defensa del Patrimonio Natural y el Colectivo Ecologista Alzina llegaron a un acuerdo para iniciar lo que, a su juicio, es el «problema medioambiental más grande al que se enfrenta Catalunya», y que hasta ahora «está siendo ignorado por la Administración catalana».

Estas organizaciones denuncian, además, las «consecuencias que supone mantener estos residuos vertidos por la empresa en las poblaciones de la comarca del Bages. Desechos que suponen -añaden- un coste de más de 200 millones de euros, dinero invertido por la Generalitat para paliar la salinización del río Llobregat que se encargan de pagar todos los ciudadanos». ≡